



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 11.756/2022

“CAT ARGENTINA SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia interlocutoria

VISTO:

El recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada cumpliendo las exigencias previstas en la Acordada 4/2007 del Superior Tribunal de la Nación. En dicha presentación se cuestiona lo decidido por mayoría en esta Sala, al entender que dicho pronunciamiento incurre en gravedad institucional constituyéndose en una sentencia arbitraria por lo que cabe, a juicio de la apelante, su descalificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La parte actora contestó el traslado conferido, en tiempo y forma.

Y CONSIDERANDO:

Los términos del planteo recursivo se centran en señalar que la decisión de la Cámara afectaría el patrimonio del Estado y en consecuencia de la comunidad en su conjunto, atento la naturaleza de los fondos tutelados por el organismo administrativo lo que ocasionará trastornos irreversibles e insanables. Destaca también el recurrente que parte de la doctrina acepta que la gravedad institucional engloba la causa, debiendo considerarse “una cuestión federal” pues personas o grupos de personas que pueden llegar a conformar la sociedad toda están ante el peligro cierto que se tornen ilusorios sus derechos a vivir bajo el amparo de los principios contenidos en nuestra Carta Magna. Esta globalidad, según expresa, a veces se traduce en urgencias, no correspondiendo condicionar el tratamiento de situaciones de esta índole a oportunidades y exigencias pensadas para procesos que no tengan tal carácter.

Ahora bien, el recurso extraordinario es un remedio procesal de carácter excepcional tendiente a salvaguardar el orden institucional lo que explica que uno de los requisitos insoslayables para su viabilidad es que la resolución impugnada cause un gravamen de rango federal y/o arbitrariedad manifiesta que afecte los lineamientos de los artículos 16, 17, 18 y 31 de nuestra Carta Magna (ver artículo 14 Ley 48) lo que no puede afirmarse de la decisión que se impugna pues en el caso de autos se analizaron las distintas constancias de la causa, los alcances de una normativa de derecho común y sus efectos en el campo de la seguridad social.

Con respecto a la arbitrariedad que se atribuye a lo decidido, cabe destacar que la misma es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que le son privativas ni corregir en tercera instancia fallos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

equivocados o que se reputen tales, ya que solo se admite en supuestos de desaciertos u omisiones de gravedad extrema a partir de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos 339:1066; 338:623; 330:499; 329:3761) extremos que no se configuran en autos, por lo que corresponde rechazar el planteo deducido.

Asimismo, lo resuelto en la sentencia atacada viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara, sumado a que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en CSS093739/2011/1- Recurso Queja N°1 – SOS SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – DGI s/IMPUGNACION DE DEUDA” sentencia del 12 de diciembre de 2017, que dejo firme -por aplicación del art. 280 CPCCN- el criterio aquí propuesto en un caso de aristas similares resuelto por la Sala I de esta Cámara.

En atención a lo expresado y teniendo en cuenta la calidad de la tarea realizada por la parte actora al contestar el traslado conferido se regulan los honorarios de su representación letrada en Dos UMA (\$24.958) CSJN Ac. 03/2023 y artículo 1.255 del C.Civ. y Ccial de la Nación.

Por lo expuesto **el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:** 1º) Rechazar el recurso extraordinario interpuesto, 2º) Imponer las costas al apelante (art. 68 CPCCN), 3º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 2 UMA (\$ 24.958). Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

No comparto la solución propiciada por mis colegas de Sala.

En autos la Administración Federal de Ingresos Públicos presenta recurso extraordinario cuestionando la decisión adoptada, por mayoría, por esta Sala referente a la proyección y aplicación del decreto 814/2001 que fijó alícuotas específicas en materia de contribuciones patronales beneficiadas por reducciones.

El recurso extraordinario en nuestro medio se encuentra reglamentado por el art. 14 de la ley 48.

Se trata de un remedio excepcional cuyo objetivo es tutelar la primacía del derecho federal respecto de sentencias provinciales, proteger la supremacía de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Constitución y demás normas de carácter federal aun contra sentencias de los tribunales federales y por último uniformar la aplicación del derecho federal (ver Sagües, Néstor Pedro “Elementos de Derecho Constitucional” Tº I pág. 313, ed. Astrea) con la finalidad estrictamente política de lograr la subsistencia del Estado Federal (Sabsay, Daniel A. “Manual de Derecho Constitucional” pág. 686, ed. La Ley; Ziulu, Adolfo G. “Derecho Constitucional” pág. 855/6, ed. Abeledo-Perrot).

El artículo 14 inc. 3 de la ley 48 establece, en la parte que nos interesa, que cuando una ley del Congreso o una comisión ejercitada en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión haya sido contra la validez del título, derecho, privilegio o exención en que se funda dicha cláusula será admisible el recurso extraordinario.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un decreto del Poder Ejecutivo emitido en los términos del art. 99 inc. 1º y 2º de nuestra Magna y lo discutido es la recta interpretación de sus alcances teniendo presente que su sanción tuvo como objetivo institucional, establecer las bases para el crecimiento sostenido de la economía, la competitividad y el aumento del empleo mediante la reducción de los costos de producción a cuyo fin se fijaron alícuotas diferenciales en materia de contribuciones empresarias.

Cabe señalar, asimismo, que nos encontramos con una normativa dictada por razones de emergencia con un fin institucional concreto, esto es, lograr la reversión de un estado de postración económica y social, lo que justifica a mi juicio que sea nuestro Máximo Tribunal de Justicia quien fije los lineamientos jurídicos respecto a la citada norma reglamentaria.

En virtud de lo anterior, por razones de orden federal y de seguridad jurídica, no resulta irrazonable considerar aplicable, a la situación bajo estudio, las directivas del art. 14, inc. 3º, de nuestra Ley Fundamental por lo que propongo: 1º) Conceder el recurso extraordinario interpuesto, 2º) Notifíquese y oportunamente elévese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sirviendo la presente de atenta nota de envío.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36387891#360537522#20230418141602116



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

